

parlamentaria, que consistía en la sustracción de algunos votos, obtenida por toda clase de intrigas, no le impediría tener confianza en el buen sentido de los numerosos hombres políticos que contaba el Senado, y conjuraba al país que tuviese igual confianza.

En el hábil discurso que desmentía los pronósticos de los adversarios de Gambetta, el *leader* de las izquierdas aludía á los rumores que, quince días antes, habían dado pábulo á las conversaciones parlamentarias. El corresponsal parisiense del *Times*, Sr. de Blowitz, muy al corriente de los detalles más secretos de la política francesa, había referido una escena acalorada, ocurrida el 1.º de julio en pleno consejo de ministros. Harto de concesiones, el mariscal había declarado á sus colaboradores que no les seguiría más allá, ni les prestaría su apoyo, si no contaban con una mayoría parlamentaria, que se vería obligado á recurrir á la disolución y que, en el momento de las elecciones, no autorizaría á nadie para que se escudase con su nombre. La *Agencia Havas* desmintió con tanta blandura las informaciones del *Times*, que adquirieron más autenticidad y certeza. Aquella táctica de siempre, que consistía en oponer el mariscal á sus ministros, supo burlarla Gambetta con la franqueza de sus declaraciones y con su sincera lealtad. El elocuente tribuno hizo ver el sistema de los adversarios de la Constitución, que presentaban al jefe del Estado como la esperanza secreta de los partidos hostiles á la República; recordó que la Constitución, al establecer la responsabilidad ministerial, había proclamado la irresponsabilidad ó inviolabilidad del presidente de la República. Después del discurso de Gambetta, las izquierdas adoptaron unánimemente por 350 votos la siguiente orden del día:

«La Cámara de los diputados, afirmando de nuevo su confianza en el señor ministro del Interior y convencida de que, en la elección de los funcionarios de la República, el gabinete no olvidará jamás los deberes que le impone el decreto de 1.º de marzo de 1871, pasa á la orden del día.»

Si esta orden del día aludía particularmente al señor de Marcere, era porque había precedido á la interpección una pregunta de un orador bonapartista, reprochando al ministro del Interior el nombramiento, como alcalde, de un individuo culpable, á sus ojos, de haber firmado un mensaje á Thiers en abril de 1871, y era sobre todo porque, en el consejo de ministros de 1.º de julio, el mariscal había reprochado al mismo señor de Marcere que siguiese á la mayoría, en vez de dirigirla, sobre la cuestión del nombramiento de alcaldes.

Antes de indicar la solución transaccional que recajó en la cuestión relativa á la composición de los municipios, mentaremos las discusiones de menos importancia política, que habían tenido efecto en el Senado y en la Cámara. De las del Senado, únicamente citaremos las del monometalismo y del bimetalismo, tratada con gran competencia por los Sres. Parieu, Ventavón y León Say y zanjada conforme á los deseos del gobierno. La depreciación de la plata, resultado del descubrimiento de minas argentíferas, ocasionaba á los países que tenían un doble tipo monetario y continuaban acuñando monedas de plata, una pérdida inevitable. Ciertos economistas, como Parieu, considerando que nada podía impedir la depreciación de la plata,

eran partidarios de la alteración de su valor y de la vuelta al tipo único. Sus adversarios, considerando la depreciación como pasajera y teniendo en cuenta el trastorno que la brusca alteración del valor monetario ocasionaría en las transacciones comerciales, pedían sólo para el Estado el derecho de suspender momentáneamente la acuñación de las monedas de cinco francos. El Senado dió razón á los economistas de la escuela de León Say, y la acuñación de dichas monedas pudo ser suspendida por decreto, hasta 1.º de enero de 1878.

En la Cámara el Municipio de París fué autorizado á hacer un empréstito de ciento veinte millones, para terminar los trabajos de la avenida de la Opera, del bulevar de San Germán, de los almacenes de depósito de Bercy y del Hôtel de Ville.

No eran votos de esta naturaleza los que podían ocasionar el conflicto con el Senado, ni las invalidaciones, puesto que, respecto á estas, el único juez era la Cámara. El 20 de junio, fué pronunciada la del conde de Mun, y remitido al ministro de Gracia y Justicia un dictamen del Sr. Guichard sobre el derecho de intervención de los sacerdotes en la vida pública. Esta última disposición fué tomada á instancias de Gambetta, según el cual no se trataba de defender á la religión, que nadie atacaba ni amenazaba. Al hablar del partido clerical, la izquierda no se refería á la religión, ni á los católicos sinceros, ni al clero nacional, sino que quería que el clero se ocupase de la iglesia, que el púlpito no se convirtiese en tribuna política, que se respetase la libertad electoral, que la lucha fuese libre para las opiniones políticas, las cuales nada tenían que ver con las cuestiones clericales. Sobre este último punto, Gambetta sólo tenía razón para los diputados de la izquierda: para los de la derecha, el clericalismo era la única base de su coalición.

Habiendo desaparecido, desde 1870, el partido intermedio entre los hombres religiosos y los no creyentes, los primeros se veían obligados á aceptar la inmaculada Concepción, el *Syllabus* y la infalibilidad pontificia. Si querían permanecer neutrales en estas y otras cuestiones en que la Iglesia se consideraba interesada, veían intervenir á los Sres. Dupanloup, Guibert y Freppel, no como hombres políticos ó conciudadanos, sino como obispos, los cuales pronunciaban *ex cathedra* las protestas más calurosas, dirigían á los poderes públicos de Francia y del extranjero las amenazas más furiosas, y después de haberse excedido grandemente en la libertad evangélica, se presentaban como mártires, víctimas de nuevos Dioclecianos.

Sin compartir las pasiones antirreligiosas de algunos intransigentes, los 350 diputados de las tres izquierdas eran francamente fieles á la doctrina del Estado laico, independiente de la Iglesia, y este era su verdadero crimen, á los ojos de la mayoría senatorial y á los de Mac-Mahón; también eran fieles á las doctrinas de libertad municipal que la derecha sólo había profesado un momento, en 1871, por espíritu de oposición á Thiers. El ponente del proyecto de abrogación de la ley de 20 de enero de 1874, Julio Ferry, planteó la cuestión con notable claridad. El gobierno consideraba las prescripciones de esta ley como letra muerta; abandonaba en absoluto el derecho de nombrar los al-

caldes en todos los municipios que no eran cabeza de partido ni de cantón; la Cámara debía seguirle y asegurar á 33.000 municipios lo que éstos consideraban como la fórmula por excelencia de la libertad, el derecho de elegir su alcalde.

Gambetta apoyó una enmienda del Sr. Le Pommelec que tendía á conferir á todos los consejos municipales, exceptuando al de París, la elección del alcalde; batióse en retirada, so pretexto de que la Cámara no era libre, desde el momento que el Sr. de Marcere hubo presentado la cuestión de gabinete. Reproducida por Madier de Montjau, la misma enmienda fué desechada por una mayoría considerable. Igualmente fué desechada una enmienda bonapartista, que confería al sufragio universal directo el derecho de elegir el alcalde, y la ley salió de las deliberaciones de la Cámara, tal como la había propuesto Julio Ferry, con un artículo adicional que hacía extensiva la aplicación de la ley á Argelia y ordenaba la renovación integral de los consejos municipales dentro de un plazo de tres meses. Inútil es decir que los alcaldes y tenientes de alcalde nombrados por el presidente de la República no podían ser escogidos fuera de los consejos municipales, como bajo el régimen de la ley de 20 de enero de 1874.

La presentación por los bonapartistas de una enmienda más radical que las de la extrema izquierda, durante la discusión de la ley que nos ocupa, no había sido la única prueba de las exageraciones democráticas del partido imperialista. Quince días antes, un diputado por Angulema, Laroche-Joubert, había interpelado al gobierno «sobre los estudios que practicaba para el mejoramiento moral y material del mayor número.» Esto era excitar al gobierno á que interviniera en los contratos entre el capital y el trabajo. Dufaure, en breves palabras energicas, contestó al interpellante: «No le pidáis tanto al gobierno; pedidle que desempeñe sus verdaderas funciones. No digáis al país que debe esperar del gobierno el mejoramiento de su suerte; decidle que lo que ha de pedir al gobierno es la libertad y la protección del trabajo.»

La comisión senatorial encargada de estudiar la ley de alcaldes contaba cinco miembros hostiles y cuatro favorables. La ley parecía, pues, destinada á fracasar. El ministro de Gracia y Justicia la salvó consintiendo en aligerarla de la disposición adicional, relativa á la renovación total de los consejos, y la Cámara ratificó la supresión.

El régimen transitorio, adoptado en la cuestión relativa á la elección de alcaldes, valía infinitamente más que el régimen que venía á reemplazar, y el Senado hizo bien en no desecharlo. Igual acierto tuvo cuando confirió, en 12 de agosto, al ministro de Gracia y Justicia la senaduría vacante por fallecimiento de Casimir-Perier. Todos los constitucionales votaron por Dufaure. Había, pues, intermitencias en la oposición del Senado. Elijiendo á Dufaure, la alta asamblea quiso significar sin duda que hacía una distinción entre el presidente del Consejo y la mayoría republicana de la Cámara. Los parlamentarios de experiencia, que en tan gran número figuraban en el Senado, olvidaron que si bien éste podía derribar ministros, era incapaz de hacer vivir á ningún ministerio. Su oposición, más bien que la de la Cámara, estaba destinada á ocasionar la caída del gabinete de 10 de marzo.

En 25 de mayo, el ministro del Interior, Sr. de Marcere, publicó el tercer decreto relativo al movimiento prefectural y que comprendía cuatro prefectos, 41 secretarios generales, 159 subprefectos y 53 consejeros de prefectura. Los funcionarios notoriamente hostiles á la Constitución desaparecían, pero muchos dudosos eran simplemente trasladados, porque altas influencias intervenían en su favor, porque el presidente irresponsable ejercía presión directa ó indirecta sobre los ministros responsables.

Toda la izquierda se mostraba conciliadora, y la discusión de los presupuestos, que empezó antes de las vacaciones, le proporcionó frecuentes ocasiones de probar que había renunciado á sus principios absolutos, á sus concepciones quiméricas de antes. El presidente de la comisión de presupuestos, que se pronunció contra la proposición del Sr. Laisant, que pedía la reducción del servicio militar á tres años, y en favor de la continuación de la embajada francesa cerca de la Santa Sede, fué el primero en dar ejemplo de esa reacción hacia la sensatez. Gambetta mostróse el más práctico de los hombres de negocios, en los quince discursos que pronunció sobre los presupuestos de Guerra y Marina, sin perjuicio de sus apariciones en la tribuna para rectificaciones que no merecían el nombre de discursos. El antiguo tribuno sólo reaparecía cuando se trataba de imponer silencio á los bonapartistas, que lo habían olvidado todo sin aprender nada desde 1870.

Los presupuestos de 1877, que León Say había presentado en la Cámara el 14 de marzo y cuya discusión había de prolongarse hasta fines de diciembre, presentaban un aumento de gastos y de ingresos, comparados con los de 1876. No introducían nuevos impuestos, ni aumento de los impuestos antiguos, ni grandes reformas. León Say pedía 2.667 millones para 1877, en vez de los 2.570 millones de 1876, presumiendo un excedente de cerca de cinco millones. La comisión operó sobre los gastos una reducción de siete millones y medio, disminuyendo los presupuestos de Cultos, del Interior, de Guerra y de Marina, aunque aumentó los de Obras públicas y de la enseñanza.

La discusión general proporcionó al bonapartista señor Haentjens un pretexto para recriminaciones, y el ministro de Hacienda demostró fácilmente que el aumento de gastos era el resultado fatal de las faltas del imperio y de la guerra. En la discusión de los capítulos, la dotación del presidente de la República fué aumentada en 300.000 francos, á pesar de la inesperada resistencia de uno de sus antiguos ministros, del señor Magne. La izquierda hizo bien en no regatear la dotación del jefe del Estado, que gastaba noblemente los recursos que la nación le consignaba y había de salir del Elíseo más pobre de lo que había entrado.

De la discusión del presupuesto de Cultos únicamente haremos memoria de la aprobación de una enmienda de Camilo Séé, suprimiendo el cabildo de San Dionisio y la capellanía de Santa Genoveva. En el presupuesto del Interior, los honorarios de los consejeros de prefectura, que era de 8.000 francos, fueron elevados á 10.000, y las subprefecturas de Sceaux y Saint-Denis fueron suprimidas por inútiles. Clemenceau hizo votar, en el presupuesto de Instrucción pública, la creación de una cátedra de patología mental en la Facultad de

Medicina de París, y Bert hizo suprimir la Facultad de Teología católica de Ruán, que contaba menos alumnos que profesores. Cierta es que el crédito eliminado había de ser restablecido por la alta Cámara; pero el Senado sólo consiguió dar á esta Facultad una vida ficticia y momentánea. En los ministerios de Obras públicas, Comercio é Industria señalaremos los aumentos de 300.000 francos concedidos para los estudios del puerto de Bona, 8.000 para la galería de paleontología del Museum y 1.700.000 para aumento de sueldo de los carteros rurales.

La discusión del presupuesto de ingresos no tuvo la amplitud de la discusión del presupuesto de gastos.

Los presupuestos generales ofrecían un superávit de 755.850 francos, pero los gastos, fijados por los votos de la Cámara en 2.736 millones, fueron aumentados por el Senado, que elevó ó restableció los créditos relativos á los cultos, al servicio de los oficiales generales y á los curas castrenses. Estos aumentos ocasionaron el conflicto ó el disenso entre el Senado y la Cámara, que referiremos al historiar el ministerio de Julio Simón.

Durante las vacaciones parlamentarias, la vida política se redujo á los viajes y discursos en que los prohombres de cada partido dieron cuenta de su mandato y expusieron á sus electores sus miras respecto á las cuestiones en perspectiva. Tales visitas y conferencias contribuían grandemente á la educación de la democracia.

Entre los discursos más sensacionales de aquel interregno parlamentario, es digno de particular mención el pronunciado por Gambetta en París. Ante 5.000 personas reunidas en Belleville, el popular tribuno repudió el jacobinismo, reprobó enérgicamente la insurrección comunal, calificada por él de criminal, y tuvo el valor de oponer, en medio de la gente menos á propósito para comprender su evolución, la política de los resultados á la política de las declamaciones.

Igualmente en París se reunió, con la tolerancia del gobierno, un Congreso de delegados obreros de las profesiones manuales, congreso que marca un momento interesante en la historia de las doctrinas sociales. En 1848, los obreros, adocotrados por Luis Blanc, no hablan más que del Estado productor, del Estado empresario, del Estado patrono. En 1900, bajo la influencia de Guesde y Jaurés, parecen haber vuelto á aquella concepción de la reforma social. En 1876, sus delegados más autorizados hacen declaraciones muy diferentes. «Sabemos que el trabajo y el capital son solidarios, dice Bonne, y que el progreso no puede realizarse sino mediante su acuerdo.» Y Nicaise afirma: «Giraremos en un círculo vicioso, cada vez que queramos salir del principio fecundo y luminoso de la Libertad.» En historia, la ignorancia de los obreros de 1876 igualaba á la de los obreros contemporáneos, así es que entre aquellos no faltó quien dijese que «el orden nuevo, nacido de la revolución, era intolerable y peor de lo que existía antes de 1789.» Justo es decir, sin embargo, que los obreros se mostraban mucho más razonables que los republicanos intransigentes, que parecían haberse propuesto impedir las adhesiones de la burguesía á la República.

Las elecciones políticas parciales fueron numerosas

durante aquellas vacaciones parlamentarias: hubo dos en agosto y siete en octubre, ganando seis los republicanos, dos los bonapartistas y una el conde de Mun. Después de estas elecciones, la Cámara se compuso de 380 republicanos y unos 150 anti-republicanos de diferentes partidos.

Las elecciones municipales verificadas el 7 de octubre en los 33.000 municipios á los cuales se había restituido el derecho de elegir alcalde y tenientes de alcalde, hicieron cambiar en favor de los republicanos la situación política de 7.000 pueblos.

Aquellos rápidos progresos de la República preocupaban al presidente del Consejo, que no acertaba á disimular su aversión á la democracia. Pero, fiel á su palabra empeñada, á los compromisos solemnemente contraídos con la mayoría y con el mariscal, Dufaure continuaba su obra de aplicación leal de la Constitución y de reorganización de la magistratura. Desde este último punto de vista, hacía presente á los fiscales que estaba prohibido á los notarios el especular en la Bolsa ó dedicarse al negocio, y combatía, por medio de circulares, el intolerable abuso de los vicariatos ficticios.

El general Cissey había tenido que abandonar el ministerio en 15 de agosto, por motivos particulares, y le reemplazó el general Berthaut. Como el mariscal se reservaba, con la dirección del ejército y de la marina, la elección del personal, no consultó, para este nombramiento, á Dufaure, presidente del Consejo, como no lo había consultado, en 10 de marzo, para el mantenimiento del general Cissey, y no se operó cambio alguno en los mandos de cuerpos de ejército. Sin embargo, varios de los principales jefes se habían comprometido de diversas maneras, durante los ministerios de Cissey y de Barail, y los generales que ejercían mando en Bourges, Lyon, Chalóns y Ruán estaban dispuestos, al decir de los bonapartistas, á un golpe de mano. Pero el único que daba pábulo á tales calumnias, con la intemperancia de su celo clerical y reaccionario, era el general Ducrot. En cuanto á los ataques contra la Constitución, el general Berthaut creyó deber prohibirlos, aunque muy indirectamente, recomendando á los oficiales generales que no aceptasen presidencias sino después de haber solicitado la autorización ministerial y que se abstuvieran, en sus discursos y en sus escritos, de toda apreciación política.

A propósito de los ejercicios anuales de la reserva de los reemplazos de 1868 y 1869, el mariscal fué á Besanzón, á Bourg y á Lyon, siendo friamente recibido por las masas republicanas, á causa de los desaciertos del gobierno.

En medio de la gran tranquilidad interior, la política exterior de Francia se hallaba en plena actividad. No nos referimos al hecho de convertir en embajada la legación de Francia cerca del rey de Italia, ni al nombramiento de los Sres. Baude, Gabriac, Tissot, Lesourd y Duchatel para las embajadas ó legaciones del Vaticano, Bruselas, Atenas, Tánger y Copenhague, sino á la reapertura de la cuestión de Oriente y á los preliminares de la guerra turco-rusa. El duque Decazes, que ansiaba salir del recogimiento en que Francia se había encerrado, después de 1870, metióse en las complicaciones orientales con cierta ligereza. Desde fines de junio de 1874, los bosniacos cristianos se agitaban en las

fronteras de la Herzegovina, de la Dalmacia y de Montenegro. Como aquella agitación se producía en presencia de la Francia anulada y de las tres potencias del Norte, reunidas por la triple alianza, parecía deber dejar á los franceses, sino indiferentes, absolutamente neutrales; estos no podían tomar partido sin indisponerse con Rusia ó con Inglaterra, que tenían en Oriente intereses opuestos. Al principio, el duque Decazes se pronunció en favor de una acción puramente moral, que

deseo manifiesto de entrar en el famoso «concierto europeo,» pues nadie había hecho en firme el ofrecimiento á Francia de asociarla á la acción común y las simples gracias de Rusia difícilmente podían pasar por una invitación.

Inútil es decir que la misión confiada á los cónsules franceses, de hacer entrar en razón á los insurrectos, fracasó completamente, y, en 30 de diciembre de 1875, el gobierno austro-húngaro expidió la nota Andrassy,



El sultán Murat V

hubiera sido confiada al Austria, lo cual en nada comprometía, al parecer, las ambiciones de esta potencia, ambiciones que quizá no eran espontáneas, pues aun no se habían revelado. En 11 de agosto, el Diván señaló á su embajador en París la extensión de la insurrección á la Herzegovina, la connivencia de Montenegro y los armamentos significativos de la Servia. El duque Decazes contestó á la comunicación del Diván que los cónsules franceses se ocuparían exclusivamente en una obra de pacificación. Si su acción hubiese sido exclusivamente pacificadora, el gobierno ruso sin duda no se hubiera apresurado tanto á dar las gracias al gobierno francés por las disposiciones amistosas que mostraba en la cuestión de Oriente. Para restablecer el equilibrio, el duque Decazes escribió al embajador francés en Londres, repitiéndole que la acción de Francia sería puramente moral y procuraría «evitar toda eventualidad de intervención.» El lenguaje usado con Inglaterra era ya algo diferente del que se empleaba con Rusia. Pero en él se advierte, además de esa apariencia de doblez, un

que pedía á la Puerta, para las provincias sublevadas, una serie de reformas que las potencias debían inspeccionar. Por medio de un despacho de 3 de enero de 1896 al embajador francés en Viena, el duque Decazes se asoció á dichas reclamaciones, respondiendo con esta adhesión á las insinuaciones y halagos que el conde Andrassy le había dirigido por conducto del señor de Vogüé. Como Inglaterra no apoyó la nota de Andrassy, ésta no surtió efecto; los insurrectos se negaron á aceptar la solución propuesta por el gobierno austro-húngaro.

Impotentes, en las provincias excéntricas de sus dominios europeos, los turcos apelaron al fanatismo musulmán en las provincias próximas á Constantinopla. La Bulgaria fué teatro de abominables actos de barbarie; más de 15.000 cristianos perecieron. La Rumelia escapó á los degüellos en masa, pero no á los atentados contra los cristianos: los cónsules de Francia y de Alemania fueron degollados en Salónica.

Mientras Bismarck, Gortschakoff y Andrassy acuerdan reunirse en Berlín, el duque Decazes escribe al

embajador de Francia en Alemania que con el asesinato de Salónica en nada cambian las cosas en el fondo, que Francia consiente en un cambio de impresiones, pero no en una conferencia, y que sólo excluye la intervención armada. El 13 de mayo, tiene efecto en casa del príncipe de Bismarck aquel cambio de impresiones entre Francia, Italia, Inglaterra y las tres potencias del Norte: el acto consiste únicamente en la lectura por Gortschakoff de un memorándum que reproduce á poca diferencia los términos y las proposiciones de la nota Andrassy.

Aquel nuevo esfuerzo, intentado cerca de Turquía, fracasó como el anterior, á pesar de la adhesión de Francia y de Italia, porque Inglaterra no quiso asociarse á él. No se comprende de qué pudo servir la intervención de Francia en aquellos preliminares, ni qué interés tenía en tomar parte en todas aquellas tentativas abortadas, ni qué idea la guiaba, ni qué fin se proponía.

Mientras los diplomáticos se entregaban á aquellas estériles negociaciones, todo iba de mal en peor en Constantinopla, bajo la dominación de Abdul-Azis. En la noche del 29 al 30 de mayo, Midhat Pachá reemplazó por Murat V al desdichado Abdul-Azis, á quien hizo «suicidar» cuatro días después. El 31 de agosto Murat V, desposeído á su vez, tenía por sucesor á Abdul Hamid. Aquella revolución, favorecida por Inglaterra, había impedido que el memorándum llegase á su destino. Bajo el reinado efímero del débil Murat, Milano de Servia declaró la guerra á Turquía el 30 de junio y Nikita de Montenegro el 2 de julio. Los turcos, debilitados políticamente, habían conservado todo su vigor bélico. Nikita se veía protegido contra ellos por la distancia; pero Milano perdió todas las batallas que les libró y se vió reducido á pedir, en 28 de agosto, la mediación de las potencias.

Reunióse la conferencia de Constantinopla, y Francia estuvo representada en ella por un enviado especial, que era el Sr. de Chaudordy. Al enviarlo á Constantinopla, el duque Decazes le manifestó oficialmente que se mantuviera á toda costa en la neutralidad, pero oficialmente le encargó que se mostrase ruso en la medida compatible con los intereses generales del país. Nadie conoció mejor que Decazes el secreto de las frases enigmáticas que nada permiten á un agente y le autorizan para todo. En esta segunda fase de las negociaciones, que precedieron á la guerra turco-rusa, la intervención de Francia fué más señalada que en la primera, y el fracaso de su diplomacia, aunque colectivo, más señalado también. Los principales acontecimientos, que interesaban á todas las potencias, fueron el ultimátum expedido, en 31 de octubre de 1876, por el gabinete de San Petersburgo, con el objeto de obtener un armisticio, documento en que repudiaba toda idea de conquista, y el protocolo de Londres, de 31 de marzo de 1877, que resumía las reformas que la conferencia de Constantinopla había pretendido imponer á Turquía, y las garantías para los cristianos, que las potencias habían querido unir á dichas reformas.

No cabe aquí detallar acontecimientos que afectan tanto á la historia interior como á la exterior de Turquía. Bastará consignar el beneplácito que se otorgó á sí mismo el duque Decazes, en 25 de abril de 1877:

«Al intervenir en las negociaciones, no teníamos más objeto que el de afianzar el acuerdo de las potencias entre sí... Después de tantos esfuerzos para evitar ese desenlace (la guerra), quedamos sólo afirmar nuestro firme propósito de permanecer ajenos á las complicaciones que puede determinar.» El duque resume luego, en estos términos, toda la política francesa: «Neutralidad absoluta, garantía para la abstención más rigurosa.» Los epítetos no impedían que fuera patente el fracaso de la diplomacia de Decazes, quien no consiguió ninguno de los dos fines que se había propuesto, y su ingerencia aturdida en el conflicto oriental, después de año y medio de negociaciones inconsideradas, había colocado á Francia, sin captarle la amistad de Rusia, en frente de una España y de una Italia hostiles, de una Inglaterra recelosa, de una Austria indiferente y de una Alemania irritada. Thiers había afirmado que el mantenimiento de Decazes en el gabinete de 10 de marzo de 1876 era un escándalo, y tenía razón. Sin embargo, el duque Decazes fué mantenido en el gabinete Julio Simón, el 12 de diciembre de 1876, como lo había sido en el de Dufaure, y como lo fué, después del 16 de mayo, en el del duque de Broglie, con el cual se retiró, el 23 de noviembre de 1878. Su papel político había concluído. Elegido diputado, como candidato oficial de Mac-Mahón, en un distrito de los Alpes Marítimos, y gracias á la más cínica de las presiones administrativas, fué invalidado por la casi totalidad de la Cámara y salió de la asamblea, sin que ninguna mano estrechase la suya. Sirvió á todos los partidos, les hizo traición á todos y todos le renegaron.

El gabinete Dufaure no sobrevivió más que un mes á la reapertura de las Cámaras para la legislatura extraordinaria de 1876. Esta legislatura hubiera sido enteramente consagrada á los presupuestos y á las leyes económicas, sin la cuestión de la cesación de los procesamientos por actos insurreccionales y sin la de las horas fúnebres, que surgió incidentalmente, suscitada por una enmienda de Floquet. Ya hemos expuesto la economía general y las grandes líneas de los presupuestos de 1877; fáltanos precisar la actitud adoptada por Gambetta en la cuestión del impuesto sobre la renta, y señalar las graves revelaciones retrospectivas hechas por el príncipe Jerónimo Napoleón. El impuesto sobre la renta proyectado por Gambetta y que la comisión había aceptado en principio y aparte de la ley de hacienda de 1877, reemplazaba ciertas contribuciones directas por un impuesto que afectaba á la renta sobre el Estado y á los beneficios profesionales. En la discusión del presupuesto de cultos, el príncipe Napoleón, orador muy desigual, pero lleno de fibra y de facundia, señaló con cierta aspereza las ingerencias del partido clerical, como un peligro para el país, y afirmó que el mantenimiento del poder temporal de los Papas había costado á Francia la Alsacia y la Lorena. Esta última afirmación era quizá demasiado absoluta, pero no dejaba de ser históricamente cierto que la protección prestada por Napoleón III al Papa, como príncipe temporal, tal vez había privado á Francia de la ayuda de Víctor Manuel.

Grande fué la agitación que produjeron en la Cámara aquellas evocaciones de un reciente y terrible pasado. Con menos ruido, el Senado trabajaba con igual

utilidad. En presencia del nuevo ministro de la Guerra, general Berthaut, tan rutinario como su antecesor, y que había mantenido en sus mandos á todos los jefes de cuerpo nombrados en 1873, votó, conforme á un excelente dictamen de Freycinet, senador por París, la ley sobre la intendencia y el servicio de sanidad militar, que subordinaba la administración de los ejércitos

cha, y en tanto que el sufragio restringido robustecía, por casualidad, á las mayorías de la derecha senatorial, el sufragio universal robustecía á la de la izquierda de la Cámara.

Ante esta Cámara, que se sentía en comunicación cada vez más íntima con el país, planteóse, desde luego la cuestión de la amnistía. En la sesión de 26 de



El sultán Abdul-Hamid II

al comandante en jefe. El dictamen de Freycinet y la parte que éste tomó en la discusión, señalada igualmente por un magnífico discurso de Audiffret-Pasquier, lo designaban, á falta de su participación en la defensa nacional, para el ministerio de la Guerra, donde tan profundas huellas había de dejar. Fuera de esas grandes y raras discusiones, los pasillos del Senado no respiraban la vida y la intriga sino cuando se trataba de proceder á la elección de los senadores inamovibles: el 25 de noviembre se eligieron dos, uno de la derecha, Chesnelong, y otro de la izquierda, Renouard. Pocos días antes, el colegio senatorial del Doubs había reemplazado un senador de la izquierda con uno de la dere-

mayo de 1876, el Sr. Gatineau había presentado una proposición firmada por 139 diputados y que tendía á poner fin á los procesamientos por actos insurreccionales. Enviada á informe de una comisión, la proposición Gatineau fué largamente discutida, oyóse al gobierno contradictoriamente y Dufaure indicó con toda claridad que, según la carta del mariscal, y en vista de que la clemencia presidencial había de ejercerse con amplitud, consideraba la cuestión como provisionalmente solventada. Las declaraciones del gobierno no detuvieron á la comisión en su trabajo; sintiéndose de acuerdo con la mayoría parlamentaria y con la opinión pública, cansada de persecuciones emprendidas tanto